

INFORME DE SECRETARIA: Hoy 18 de septiembre de 2020 paso a Despacho de la señora juez la presente demanda para resolver sobre la excepción previa formulada por el apoderado de la demandada.

Se dio traslado a la parte demandante y no se pronunció al respecto.

DIANA ESTEFANÍA GALLEGO TORRES
Secretaria

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL

Manizales, veintiuno (21) de septiembre de dos mil veinte (2020)

RADICADO	2019-709
PROCESO	VERBAL SUMARIO (Prescripción extintiva de hipoteca)
DEMANDANTES	CECILIA MORALES OSORNO y OSCAR CASTAÑO VALENCIA
DEMANDADO	BANCO DAVIVIENDA S.A.

Una vez agotados los términos de traslado respectivos, se procede a resolver a continuación sobre la excepción previa formulada por el apoderado de la demandada, dentro del proceso de la referencia, denominada “No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”.

ANTECEDENTES

Se presentó demanda verbal sumaria con el fin de liberar el inmueble distinguido con matrícula inmobiliaria 100-18955, el cual soporta actualmente un gravamen hipotecario a favor del Banco Cafetero, según escritura pública 1.387 del 16 de septiembre de 1.983 de la Notaría Segunda de Manizales.

En los hechos de la demanda se destaca que el acreedor hipotecario, Bancafé o Granbanco S.A., fue absorbido por el Banco Davivienda S.A., mediante escritura Pública No. 7019, calendada 29 de agosto de 2007, suscrita en la Notaría 71 de Bogotá, motivo por el cual se dirige la demanda contra ésta última. Sostiene que en el año 1.996 se impetró un proceso ejecutivo hipotecario donde figuraba como ejecutante el BANCO CAFETERO, sin embargo asegura, ya fueron canceladas todas las obligaciones y además fue levantado el embargo que reposaba sobre dicho predio pero no se canceló la hipoteca por cuanto no se encuentra documentación alguna.

Luego del estudio respectivo este juzgado admitió la citada demanda mediante auto del 16 de diciembre de 2019 y ordenó imprimirle el trámite previsto en los artículos 390 del Código General del Proceso.

Una vez notificado el representante legal de la entidad demandada, interpuso como excepción previa la denominada “No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”, aduciendo con base en certificado adjunto que la obligación

2565298000662 fue cedida por el Banco a la Central de Inversiones S.A. mediante contrato interadministrativo de compraventa de Cartera celebrado entre las dos entidades el 27 de octubre de 2000; por tanto Davivienda ha perdido interés jurídico en las pretensiones de la demanda y en ese sentido solicita dar aplicación al último inciso del Art. 61 CGP.

A través de auto fechado el 27 de agosto último se corrió traslado de la excepción a la parte actora pero ésta no contestó. Así las cosas, resulta imperativo entrar a decidir la formulación presentada, habida cuenta que no se hace necesario decretar pruebas adicionales a las presentadas por la parte actora.

CONSIDERACIONES

Vale la pena aclarar en primer lugar que de acuerdo con las exigencias legales y procesales, la excepción previa fue formulada en término y se ajusta a las previsiones del artículo 100, al invocarse de manera textual. Por otra se dio traslado a la contraparte y no existen otras pruebas para practicar, distintas a las documentales anexas y las que reposan en el expediente.

Las excepciones previas son medios de defensa que permiten al demandado velar por la garantía del debido proceso y de paso asegurar la legitimidad de los operadores judiciales y la intervención de quienes legalmente deben hacer parte en los respectivos procesos. Según las voces del Consejo de Estado, las excepciones constituyen una herramienta que otorga el ordenamiento jurídico para que el demandado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa, ya sea atacando las pretensiones del demandante, enderezando el litigio para evitar posibles nulidades o terminando el proceso al considerar que este no cuenta con todas las formalidades que exige la ley para que pueda ser adelantado:

(...) Las excepciones previas también conocidas como dilatorias deben ser resueltas en el trámite de la audiencia inicial y son aquellas destinadas a sanear el proceso, su cometido no es el de cuestionar el fondo del asunto, sino el de mejorar el trámite de la litis o terminarla cuando ello no es posible, evitando posibles nulidades y sentencias inhibitorias numeral 6 del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011. (...) debe destacarse que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no reguló cuáles excepciones eran previas, por lo que de conformidad con el artículo 306 de la aludida codificación es necesario acudir al artículo 100 de la Ley 1564 de 2012 -Código General del Proceso-, en el que se determinó de manera taxativa cuales medios de oposición que constituían este tipo de excepción, encontrando, entre otras, la falta de jurisdicción o de competencia, la existencia de compromiso o clausula compromisorio y la indebida acumulación de pretensiones.¹

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia considera a las excepciones como: “una herramienta defensiva con que cuenta el demandado para desmerecer el derecho que en principio le cabe al demandante; su función es cercenarle los efectos. Apunta, pues, a impedir que el derecho acabe ejercitándose.” “...su protagonismo supone, por regla general, un derecho en el adversario, acabado en su formación, para así poder lanzarse contra él a fin de debilitar su eficacia o, lo que es lo mismo, de hacerlo cesar

¹ Sentencia 00926 del 30 de agosto de 2018. M.P. Dr. Ramiro Pazos Guerrero.

en sus efectos; la subsidiariedad de la excepción es, pues, manifiesta, como que no se concibe con vida sino conforme exista un derecho; de lo contrario, se queda literalmente sin contendor”².

El artículo 100 del Código General del Proceso prevé un compendio de causales que ha denominado excepciones previas, con el fin de evitar nulidades posteriores, o asegurar la legitimación de quienes intervienen, incluyendo el operador judicial dentro del ámbito de sus competencias. Dicha relación implica que quien pretenda alegar una situación bajo dicha regla debe ajustarse textualmente a las alternativas que de ella emana, so pena de no ser siquiera estudiada su petición.

Para el caso bajo estudio el memorialista asevera que si bien el Banco Davivienda actúa como cesionario de los activos, pasivos y contratos del Banco Cafetero S.A., la obligación No. 2565298000662 a cargo de CASTAÑO VALENCIA fue cedida por aquel a la Central de Inversiones S.A. mediante contrato interadministrativo de compraventa de cartera celebrado entre las dos entidades el 27 de octubre de 2000.

Al revisar el certificado de existencia y representación legal del Banco Davivienda, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, se evidencia que en efecto, mediante escritura pública 7.019 del 29 de agosto de 2007 de la Notaría 71 de esa capital, la sociedad de la referencia (Banco Davivienda s.a.) absorbió mediante fusión a la sociedad GRANBANCO S.A. (absorbida), quedando ésta última disuelta sin liquidarse. Recordemos además que el Banco Cafetero tuvo varias modificaciones, incluyendo su denominación como Bancafé y posteriormente Granbanco s.a.

También es del caso destacar que el Banco Davivienda s.a. celebró contrato interadministrativo de compraventa de Cartera con Central de Inversiones s.a. –CISA– el 27 de octubre de 2000, dentro del cual se cedió la obligación(es) Nro. 2565298000662 a cargo del señor OSCAR CASTAÑO VALENCIA, según la certificación adjunta, la cual en ningún momento fue controvertida por la contraparte, lo que le brinda presunción de legalidad absoluta.

Por su parte la Central de Inversiones s.a. es una sociedad comercial de economía mixta del orden nacional, vinculada al ministerio de hacienda y crédito público de naturaleza única, sujeta en la celebración de todos sus actos y contratos al régimen de derecho privado.

Ante tales circunstancias encuentra procedente esta operadora la vinculación de la citada entidad como litisconsorte necesario de la parte demandada, en el presente proceso, habida cuenta de la titularidad que puede ostentar respecto de la garantía hipotecaria constituida para respaldar las obligaciones adquiridas por los demandados a favor del Banco Cafetero.

En consecuencia se ordenará citar y notificar al representante legal de CISA, tanto del auto admisorio de la demanda como del presente auto, corriéndole traslado por el término de diez días, tal como indica el inciso 5º del artículo 391 del Código General del Proceso.

² CSJ. Civil. Sentencia 109 de 11 de junio de 2001, expediente 6343, reiterando G.J. XLVI-623 y XCI-830.

Por otra parte, atendiendo lo dispuesto por el artículo 61 del mismo ordenamiento procesal, se suspenderá el presente proceso hasta tanto se notifique al nuevo demandado.

Por lo expuesto, el JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción previa formulada por el representante del Banco Davivienda s.a., denominada “No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios”, dentro del proceso verbal sumario (Prescripción extintiva de hipoteca) promovido mediante apoderado por los señores CECILIA MORALES OSORNO y OSCAR CASTAÑO VALENCIA contra BANCO DAVIVIENDA S.A.

SEGUNDO: VINCULAR a CENTRAL DE INVERSIONES S.A. –CISA- como litisconsorte necesario de la parte demandada, en el presente proceso, de acuerdo con lo dicho en la parte motiva de este proveído.


Cítese y notifíquese a su representante legal o quien haga sus veces, el contenido del auto fechado el 16 de diciembre de 2019, mediante el cual se admitió la demanda de la referencia, al igual que el contenido del presente auto, corriéndole traslado por el término de diez días, tal como indica el inciso 5º del artículo 391 del Código General del Proceso.

TERCERO: SUSPENDER el presente proceso hasta tanto se notifique al litisconsorte.

CUARTO: REQUERIR a la parte actora para que adelante los trámites necesarios con el fin notificar al representante de CENTRAL DE INVERSIONES S.A. –CISA.

Para lo anterior la parte actora dispone de un plazo de treinta (30) días siguientes a la notificación de este proveído, so pena de dar aplicación al artículo 317 del Código General del Proceso, en cuanto a la terminación por desistimiento tácito.

NOTIFÍQUESE


VALENTINA SANZ MEJÍA
JUEZ